

Guadalajara de Buga, julio 31 del 2015

Honorable

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE BUGA

Reparto

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LEY
1437 DEL 2011

Demandante: JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES

Demandados: NACION -MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

JHON WILSON PLATA MÉNDEZ abogado en ejercicio e identificado como aparece registrado al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderado del señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, CC No. 16.367.549 de tulua (V), residente en la carrera 32 No. 24-56, barrio céspedes del municipio de tulua (V); por medio del presente escrito presento acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 del CPACA, contra (i) el acta medico laboral No. 55 Del 22 de enero del 2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca;¹ (ii) contra el acta medico laboral No. 7041 MDNSG-TML -41.1 registrada a folio No. 298 del 19 de agosto del 2014 proferida por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía² y, (iii) contra la resolución No. 33504 de fecha 01/12/2014 proferida por la jefe de indemnizaciones de la policía nacional, mediante la cual se le reconoce y liquida las prestaciones correspondientes al señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES en razón a la perdida de la capacidad laboral reconocida en el tribunal médico laboral No. 7041 de 19/08/2014³. Entidades debidamente representada por el señor ministro de defensa Luis Carlos Villegas; demanda que presento en siguiente forma:

I. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

Por tratarse de solicitudes sobre derechos prestacionales como lo es la pensión de invalidez, no se requiere agotar el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa.

II. PRETENSIONES:

PRIMERO:- Declarar la nulidad (i)del acta medico laboral No. 55 del 22 de enero del 2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca, mediante el cual se le determino la perdida de la capacidad laboral del 80.27% al señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, (ii) declarar la nulidad del acta medico laboral No. 7041 MDNSG-TML -41.1 registrada a folio No. 298 del 19 de agosto del 2014 proferida por el tribunal médico

¹ Ver folio 333-35 adjuntos

² Ver folio 36-42 adjuntos

³ Ver folio 43 adjuntos

laboral de revisión militar y de policía, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación presentado por el señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES en contra del acta medica anterior, donde se modifico el porcentaje de la perdida de la capacidad laboral del 80.27% al 76.09 %, desconociéndole la evolución y la imputabilidad de las patologías valoradas al servicio público de policía y, (iii) declarar la nulidad de la resolución No. 33504 de fecha 01/12/2014 proferida por la jefe del área de prestaciones sociales de la policía nacional, mediante la cual se le reconoce y liquida las prestaciones correspondientes al señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES en razón a la perdida de la capacidad laboral reconocida en el tribunal médico laboral No. 7041 de 19/08/2014, desconociéndole el derecho a la pensión por invalidez.

SEGUNDO:- Que como consecuencia de la anterior declaración y **A Titulo De Restablecimiento Del Derecho** CONDENASE a la entidad demandada (i) A que reconozca y pague la pensión de invalidez a favor del señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, de conformidad con el artículo 89 del decreto 094 de 1989 y teniendo en cuenta que el derecho de opción del actor es la pensión de invalidez, toda vez que goza de asignación de retiro es menor favorable, (ii) así mismo **A Titulo De Restablecimiento del derecho** CONDESE a la entidad demanda a reliquidar la indemnización por incapacidad relativa y permanente que se efectuó al señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, en la resolución No. 33504 de fecha 01/12/2014 proferida por la jefe de indemnizaciones de la policía nacional, en razón a la perdida de la capacidad laboral reconocida en el tribunal médico laboral No. 7041 de 19/08/2014 y el origen laboral de patología psiquiatría

TERCERO:- Pretensión Subsidiaria: en caso de no declararse la nulidad de las actas medico laborales acusadas en la pretensión No. 1, solicito que se le reconozca la pensión de invalidez al señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, de conformidad con el derecho de opción y en el entendido que su objeción es el reconocimiento a la pensión de invalidez y no la asignación de retiro de la cual actualmente goza.

CUARTO:- Que como consecuencia de declaración anterior **CONDENASE** al Ministerio de Defensa- Policía Nacional a **RELIQUIDAR Y PAGAR** a favor de JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, todos los sueldos, primas y demás prestaciones laborales que debía percibir por concepto de la pensión de invalidez en los términos establecidos en el artículo 89 del Decreto 094 de 1989, desde el 19 de agosto del 2014 fecha en la que se le realizo el ultimo tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso administrativo.

QUINTO:- La entidad demandada dará cumplimiento a la presente sentencia, conforme al término de cumplimiento indicado en el Código de procedimiento Administrativo.

III. HECHOS QUE SUSTENTAN MIS PRETENSIONES

1. Es cierto que el señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, nació el día 16/04/1969, es natural de tulua valle, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.367.549 de tulua (V);⁴ estuvo activo en la policía nacional por el lapso de 21 años, 6 meses y 15 días, ⁵ actualmente reside en la carrera 32 No. 24-56, barrio céspedes del municipio de tulua (V), está casado con la señor DIANA MARIA MILLAN JARAMILLO⁶ y es padre de los menores de edad MANUELA MOSQUERA MILLAN, JUAN JOSE MOSQUERA MILLAN ⁷ y JUAN DAVID AGUDELO ACOSTA,⁸ está retirado de la policía nacional desde el día 29/04/2013 con ocasión al derecho a la asignación de retiro con el grado de intendente jefe, conforme lo acredita la resolución No. 011710 del 03/04/2013⁹.
2. Es cierto que el señor Juan Carlos Mosquera torres, estando en servicio activo fue objeto de una incursión guerrillera el día 31 de enero del 2010 en la subestación de policía piedrancha perteneciente al departamento de policía de Nariño¹⁰, presentando multiplex heridas con arma de fuego e irradiando en su estado anímico y funcional, lo que conllevo a desarrollar una serie de patologías que afectaron su salud de forma relevante, toda vez que en razón a sus multiplex heridas, la policía nacional dio apertura al informativo administrativos por lesiones No. 034 del 16 de febrero del 2010 proferido por comandante del departamento de policía Nariño¹¹, y en razón a la patología de **neurocirugía**, mediante el acta medico laboral No. 787 del 17 de noviembre del 2011 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca¹², solo le fue valorado al actor el trauma que dicho atentado terrorista le causo en la columna vertebral, determinándosele una pérdida de la capacidad laboral del 62.14 %, determinando el origen de las patologías como laborales por tratarse de una accidente de trabajo. En razón a la junta medico laboral antes citada, el señor MOSQUERA TORRES se mostro inconforme y presento apelación argumentando el profundo dolor que padecía, inconformidad que se resolvió confirmando la decisión de alzada a través del acta medica laboral No. 4560 de fecha 26 de junio del 2013 registrada a folio No. 091 del libro de tribunales médicos, decidió ratificar integralmente el contenido de la junta médica apelada No. 787 del 17/11/2011¹³.
3. Es cierto que el señor MOSQUERA TORRES, siguió activo en la policía nacional hasta el día 03 de abril del 2013, fecha en la que se le notifico el contenido de la resolución No. 01170 del 03 de abril del 2013 proferido por el director general de la policía nacional, dicho acto se produjo por solicitud propia del señor MOSQUERA TORRES¹⁴

⁴ Ver cedula a folio No. 44 adjunto

⁵ Ver certificación a folio 33 adjunto

⁶ Ver folio No. 47 adjunto

⁷ Ver folios No. 48-49 adjunto

⁸ Ver folios 50-56 adjunto

⁹ Ver folio No. 57-59 adjunto

¹⁰ Ver folio No. 60-85 adjunto

¹¹ ibídem

¹² Ver folio No. 25-27 adjuntos

¹³ Ver folios NO. 28-32 adjuntos

¹⁴ Ver folios No. 57-59 adjuntos

4. Es cierto que el tiempo de servicio activo que tenía el señor MOSQUERA TORRES, en la policía nacional dio lugar al reconocimiento de la asignación de retiro¹⁵
5. Es cierto que una vez efectuado el retiro del señor MOSQUERA TORRES, la policía nacional evaluó la pérdida de la capacidad laboral definitiva a través del acta medico laboral No 55 de 22 de enero del 2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca, en donde se le otorgo una pérdida de la capacidad laboral del 80.97% identificando entre las patologías de psiquiatría en donde se le dio el diagnostico de trastorno depresivo moderado, ello en razón a los fuertes dolores y depresiones que presentaba el señor MOSQUERA TORRES con ocasión de las graves lesiones en la columna vertebral que le ocasiono el ataque guerrillero del día 31 de enero del 2010, lo que irradío de forma definitiva en su salud mental. Conforme a lo anterior el señor MOSQUERA TORRES se mostro inconforme con las decisiones de la junta medico laboral No. 55 del 22/01/2014, dando lugar a que desatara la apelación ante el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía, en donde las autoridades medico laborales examinaron las patologías de cara a las inconformidades del demandante, y a través del acta medico laboral No. 7041 del 19 de agosto del 2014 , decidió modificar las decisiones del acta medica No. 55 del 22/01/2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca, omitiendo identificar que las patologías de psiquiatría que eran imputables al servicio activo de la policía nacional, tal cual como lo acredita el acápite Numero VI de las decisiones del tribunal médico laboral, en donde plenamente se evidencia que al trastorno depresivo moderado, tanto la seccional de sanidad valle del cauca a través de la junta medico laboral No. 55 de 22/01/2014, como el tribunal médico laboral a través del acta No. 7041 del 19/08/2014 le asignaron a esta patología el índice de lesión 3-027 literal A, clasificando su origen como común es decir que fue adquirida en servicio pero no por causa y razón del mismo, hecho que **objetó e impugno** a través de este medio de control porque esta lesión psicológica que padece el señor MOSQUERA TORRES, es consecuencia del atentado padecido en la incursión guerrillera el día 31 de enero del 2010 en la subestación de policía piedrancha perteneciente al departamento de policía de Nariño, en donde resulto gravemente herido conforme lo acredita el acta medico laboral No. 787 del 17/11/2011¹⁶
6. Conforme a las patologías medico laborales, valoradas por la seccional de sanidad valle del cauca en el acta 55 del 22/01/2014 y, el tribunal médico laboral en el acta No. 7046 del 19/08/2014, se profirió la resolución No. 33504 de fecha 01/12/2014 en donde se le reconoce y liquida las prestaciones correspondientes al señor MOSQUERA TORRES, por valor de \$ 12.487.482, equivalentes a un total del factor de disminución del 4.9 sueldos¹⁷.
7. En conclusión, es cierto que las actas medico laborales No. 55 del 22/01/2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca, el acta medico laboral No. No. 7041 del 19/08/2014 proferida por el tribunal

¹⁵ Ver folio 46 adjunto

¹⁶ Ver folio 25-27 adjunto

¹⁷ Ver folio 43 adjunto

médico laboral y, la resolución No. 33504 del 01/12/2014 proferida por la jefe del grupo de indemnizaciones de la policía nacional mediante la cual se le liquido la indemnización al señor Mosquera Torres, se fundaron ilegalmente porque **Fueron Falsamente Motivadas Y Porque Fueron Proferidas De Forma Irregular**. veamos primero que todo como deben fundarse los actos administrativos que se demandan:

7.1 SOBRE EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES POR LESIONES, El concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del H. Consejo de Estado, de fecha 22 de abril de 2004, Radicado 1558, en la que se explicó el procedimiento que debía llevarse a cabo para obtener el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de lesiones sufridas por un integrante de las fuerzas militares.

*El procedimiento administrativo de reconocimiento y liquidación de prestaciones por lesiones del personal amparado por el Decreto Ley 1796 de 2000, se cumple mediante una actuación administrativa que se puede dividir en **tres etapas**. Antes de revisar esas etapas, debe decirse que esta actuación se rige por las normas especiales de los decretos reseñados y en lo no previsto en ellos, por el procedimiento general establecido en la primera parte del Código Contencioso Administrativo. Como se verá más adelante, aspectos como las modalidades de iniciación, el término de dos meses para investigar y producir el Informe Administrativo por Lesiones, rendirlo en un formato especial, las oportunidades para solicitar modificaciones a los informes administrativos y médico-laborales dentro de términos propios, la calificación de la disminución de la capacidad sico-física de la persona lesionada por parte de las Juntas Médico-Laborales Militares o de Policía, las facultades de modificación de las decisiones de las Juntas por el Tribunal Médico- Laboral de Revisión Militar y de Policía, la irrevocabilidad de sus actos, etc., constituyen elementos de un procedimiento legal a todas luces específico y por lo tanto de aplicación preferente. Es claro que el procedimiento señalado en estas normas especiales debe cumplirse rigurosamente para garantizar el derecho fundamental al debido proceso.*

7.1.1 DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA POR LESIONES

Resulta conducente distinguir las tres etapas de la actuación:

a. Primera etapa. El informe administrativo por lesiones

La actuación administrativa se inicia a partir del momento en que el Comandante o Jefe respectivo tiene conocimiento del hecho, en el cual ha resultado lesionado personal bajo su mando. Tal conocimiento puede ser por percepción directa, o por informe del superior del lesionado o de éste mismo.

El Comandante o Jefe respectivo dispone de dos (2) meses para adelantar la averiguación pertinente y allegar las pruebas de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Es bueno decir que para esta etapa la ley no señala un procedimiento especial, siendo, por tanto, aplicables las normas del Código Contencioso Administrativo referentes a las actuaciones de oficio. Esta etapa culmina con el Informe Administrativo por Lesiones, en el cual se describen tales circunstancias y se informa¹⁸ si las mismas ocurrieron en una de las siguientes posibilidades:

¹⁸ Es de observar que la norma actual, es decir, el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000) emplea los verbos "describir" e "informar", mientras que la anterior, el artículo 35 Decreto de 94 de 1989 hacía alusión a "calificar" los hechos por parte del Comandante o Jefe respectivo etapa se inicia con la autorización del Director de Sanidad de la respectiva fuerza para reunir la Junta como primera instancia Médico- Laboral y culmina con la decisión del Tribunal Médico Laboral en segunda y última instancia.

- a) *En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común.*
- b) *En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo.*
- c) *En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.*
- d) *En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior.*

El informe administrativo se notifica al lesionado y éste tiene tres meses para solicitar la modificación ante los Comandos de Fuerza o ante la Dirección General de la Policía Nacional, según sea la institución a que pertenezca el lesionado. Una vez en firme, el informe se constituye en uno de los soportes para la calificación médico-laboral.

b. Segunda etapa. La calificación Médico-Laboral. Dos instancias

Una de las causales para convocar la Junta Médico-Laboral es la existencia de un informe administrativo por lesiones. Esta segunda etapa se inicia con la autorización del Director de Sanidad de la respectiva fuerza para reunir la Junta como primera instancia Médico-Laboral y culmina con la decisión del Tribunal Médico-Laboral en segunda y última instancia.

Como se explicó, ante la existencia del Informe Administrativo por Lesiones, se debe reunir la Junta Médico-Laboral Militar o de Policía "con presencia del interesado", según lo dispone el numeral 2° de los artículos 19 y 20 del Decreto 1796 de 2000, para valorar y registrar las secuelas definitivas de las lesiones, clasificar el tipo de incapacidad psicofísica y aptitud para el servicio, pudiendo recomendar la reubicación laboral si es lo indicado, determinar la disminución de la capacidad psicofísica, registrar la imputabilidad al servicio de acuerdo con el mencionado Informe, en suma, dar su dictamen sobre el estado de salud del paciente (artículo 15 ibídem).

La Junta tiene un plazo de noventa (90) días, contados a partir del recibo de los conceptos médicos definitivos que determinen las secuelas permanentes (parágrafo del artículo 16), para producir su dictamen, el cual se notifica al interesado conforme al artículo 30 del Decreto Ley 94 de 1989.

Frente al dictamen de la Junta Médico-Laboral, también el Decreto Ley 94 de 1989 otorga al interesado, en su artículo 29, un derecho especial de impugnación, consistente en solicitar la convocatoria del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, para que éste revise en segunda y última instancia la decisión de la Junta, pudiendo ratificarla, revocarla o modificarla.

En este punto se destaca que la normatividad especial que se viene describiendo concibe el Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, como el organismo administrativo de mayor jerarquía y límite máximo en esas materias, puesto que lo ubica como última instancia frente a los reclamos contra las decisiones de las Juntas Médico-Laborales y además, porque sus determinaciones "son irrevocables y obligatorias y contra ellas solo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes".

El Tribunal Médico-Laboral debe ser convocado por "orden del Comandante General de las Fuerzas Militares, Director General de la Policía Nacional o Secretario General del Ministerio de Defensa, según el caso, a solicitud escrita del interesado o de la respectiva dirección de sanidad".

El artículo 29 del Decreto Ley 94 de 1989, otorga al interesado un plazo de cuatro meses contados a partir de la notificación de la decisión de la Junta, para solicitar la convocatoria del Tribunal, con el fin de que revise el dictamen de primera instancia.

c. Tercera etapa. El acto administrativo definitivo

Una vez se encuentre en firme la decisión de la Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, ya porque no se solicitó la convocatoria del Tribunal Médico-Laboral Militar o de Policía, o bien porque habiéndose solicitado, el Tribunal dictó su decisión final, la cual es irrevocable, y por tanto, contra ella no proceden recursos, el expediente pasa al Jefe de Recursos Humanos de la Fuerza respectiva o la Policía Nacional para la liquidación y reconocimiento de las prestaciones correspondientes, cuya expedición fue delegada por el Ministro de Defensa Nacional en los Jefes de Desarrollo Humano de las Fuerzas Militares, mediante la Resolución No. 1383 del 25 de septiembre de 2001.

La resolución de reconocimiento y liquidación de las prestaciones correspondientes a la persona lesionada, constituye el acto administrativo definitivo que crea una situación jurídica individual y concreta, pues encierra la decisión final de la Administración sobre la actuación administrativa adelantada y pone término a ésta. Es un acto complejo que se notifica al interesado y contra él procede el recurso de reposición, de acuerdo con el numeral 1° del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, mas no el de apelación, en el caso de las Fuerzas Militares, pues el funcionario que la expide lo hace por delegación del Ministro y no hay apelación contra los actos de éste, de conformidad con el inciso segundo del numeral 2° del mismo artículo

7.1.2 LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL MÉDICO-LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA. SU IRREVOCABILIDAD

El planteamiento que se ha venido desarrollando conduce a definir que las decisiones del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, son también actos administrativos preparatorios, porque no ponen fin a la actuación y su finalidad consiste en aportar elementos de juicio, para la Decisión final, el otorgamiento de las prestaciones.

Sin embargo, por una excepción expresa a lo que dispone el inciso 1° del artículo 135 del C.C.A., contra los actos del Tribunal Médico-Laboral sí procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, el artículo 22 del Decreto Ley 1796 de 2000 establece que las decisiones, del Mencionado Tribunal son "irrevocables", con lo cual está disponiendo tácitamente que no son susceptibles de los recursos por vía gubernativa ni de revocatoria directa, y expresamente afirma que contra ellas "sólo proceden las acciones jurisdiccionales pertinentes".

Con todo, no sobra señalar que como se trata de un acto preparatorio que da soporte a la decisión administrativa de reconocimiento prestacional, podría ocurrir que de adelantarse la demanda contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho contra esta decisión del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, no se produzca la decisión administrativa de reconocimiento de las prestaciones correspondientes hasta tanto haya pronunciamiento judicial sobre su legalidad, de forma tal que el interesado y afectado no tenga compensación económica alguna en mucho tiempo. Por ello, la lógica podría indicar que una vez producido el pronunciamiento del Tribunal, debe darse la decisión administrativa de la autoridad competente que reconozca las prestaciones médico asistenciales correspondientes a esa definición médico laboral y se adelantaría el juicio contencioso contra esta decisión y la decisión del Tribunal Médico-Laboral de Revisión, pero habiéndose reconocido parte del derecho económico del afectado.

8. Conforme a la explicación anterior del consejo de estado y que nos enseña cuales son las etapas que deben evacuar los actos demandados, llama la atención la falsa motivación en las que se fundaron los actos acusados y que sirvieron de sustento a la resolución No. 33504 del 01/12/2014 para otorgarle la liquidación de indemnización al señor JUAN CARLOS MOSQUERA, luego entonces a efectos de demostrar cómo las autoridades medico laborales motivaron falsamente las actas medico laborales; es

necesario examinar los siguientes aspectos (i) el primer acto es la junta medico laboral No. 55 del 22 de enero del 2014 proferido por la seccional de sanidad valle del cauca, en donde se examinaron las siguientes patologías y antecedentes, alterando la entidad demandada el diagnostico real de la patología psiquiátrica, pues no es cierto que el señor Mosquera Torres presente una leve depresión, hecho que es falso de toda falsedad¹⁹, además de ello, esta patología psiquiátrica es de origen laboral y no común ya que es imputable al servicio, pues es consecuencia de las graves lesiones que se le produjo la guerrilla de las FARC el día 31/01/2010 mientras prestaba sus servicio como comandante de dicha subestación de policía.

Nótese que si bien la Junta medico laboral No. 55 del 22/01/2014 no estableció una fecha de estructuración de las lesiones que le aquejan al señor MOSQUERA TORRES, lo cierto es que en el Acta se encuentra calificada la pérdida de la capacidad laboral que genero la patología de psiquiatría como **accidente común**, por cuanto la deficiencia que ostenta en la actualidad se debe al accidente que sufrió en razón a la incursión guerrillera el día 31 de enero del 2010 en la subestación de policía piedrancha perteneciente al departamento de policía de Nariño:²⁰

- D. Antecedentes-lesiones-afecciones-secuelas:
1. **Hernia discal T12-L1, y L4-L5c con dolor residual crónico**
 2. **Trastorno depresivo moderado**
 3. **Hipoacusia neurosensorial oído derecho con promedio de 30.3 decibeles**
 4. **Hipertensión sin repercusión orgánica**
 5. **Hipotiroidismo**
 6. **Posoperatorio de cirugía bariatica sin trastornos funcionales**
 7. **Purpura pigmentada y melasma facial**
 8. **Miopía aguda con agudeza visual 20/20 con corrección**
- E. clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de la capacidad para el servicio

INCAPACIDAD PERMANENTE E INVALIDEZ –APTITUD NO APTO, NO REUBICACIÓN LABORAL

¹⁹ Téngase en cuenta que las autoridades le asignaron a la patología psiquiátrica el numeral 3-027 del artículo 79 del decreto 094 de 1989. Conforme al diagnostico emitido por el especialista de salud ocupacional, que se evidencia a folio 86 adjunto

²⁰ Ver folios 33-35 adjuntos

A. EVALUACIÓN DE LA PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL

Presenta una pérdida de la capacidad laboral de:

Actual : dieciocho punto ochenta y tres 18.83%

Total : ochenta punto noventa y siete por ciento 80.97%

B. imputabilidad del servicio. De acuerdo al artículo 24 del decreto 1796/2000 **A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 no le figura informe administrativo. Se trata de enfermedad común.**

C. Fijación de los correspondientes índices. De acuerdo al artículo 71 del decreto 094/1989, modificado y adicionado por el decreto 1796 de 2000, le corresponde los siguientes índices

A.1. grupo 1 artículo 77 sección E numeral 1-062 literal A 5 puntos

A.2. grupo 3 artículo 79 sección C numeral 3-027 sin literal 4 puntos

A.3. grupo 6 artículo 82 sección A numeral 6-034 literal A 2 puntos

A.4. grupo 5 artículo 82 sección A numeral 5-033 Literal A 4 puntos

A.5. grupo 2 artículo 78 sección B numeral 2-020 sin literal 8 puntos

A.7. grupo 10 artículo 86 sección A numeral 10-012 literal A 2 puntos

A.6 y A.8 no ameritan asignación de índice lesional

Notal: no se reubica por tratarse de usuario retirado

9. Es entonces que la anterior decisión se fundó en antecedentes de secuelas que si bien a ***prima facie*** son de origen común, lo cierto es que estas secuelas son consecuencia de la toma guerrillera que padeció el señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, el día el día 31 de enero del 2010 en la subestación de policía piedrancha perteneciente al departamento de policía de Nariño, ya que fue desde esa fecha en la que el señor MOSQUERA TORRES, empezó a presentar trastornos de ansiedad y estrés postraumático, pues las graves afecciones en su columna generaron un profundo dolor que se ve reflejado continuamente en su historia clínica y que fue objeto de omisión por las autoridades medico laborales de ambas instancias²¹
10. Omitieron las autoridades medico laborales que la patología psiquiátrica que presenta el señor MOSQUERA TORRES, fue contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral que desempeño en la policía nacional, lo que hace que esta patología psiquiátrica sea imputable al servicio público de policía como una enfermedad de origen laboral y no común como erradamente lo determino la entidad demandada en las actas medico laborales acusadas. ²²

Esta imputación del estrés postraumático crónico obedece a que en el caso en concreto existe una relación de causalidad entre el factor de riesgo causal ocupacional existente en el entorno laboral del señor MOSQUERA

²¹ Téngase en cuneta su historia clínica aportada a folio 86-350 adjuntos

²² Ver folio 86 adjunto

TORRES durante el lapso que estuvo activo en la policía nacional, ello se demuestra en los siguientes hechos:

- 9.1. La presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el señor Mosquera Torres, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, es la toma guerrillera que padeció el día el día 31 de enero del 2010 en la subestación de policía piedrancha perteneciente al departamento de policía de Nariño, donde resulto gravemente herido con arma de fuego produciéndole una protuberante perdida de la capacidad laboral, como lo prueba el acta medico laboral No. 787 del 17/11/2011, que milita a folio 25-27 del C.O y que tiene sustento en el informe administrativo por lesiones No. 034 del 2014 proferido por el comandante del departamento de policía Nariño, obrante a folio 60-85 del C.O; ya que fue a partir de esta fecha en que se empezó a generar la historia ocupacional tras la exposición de constantes dolores, los cuales fueron sucesivo generando las discapacidades mentales que nunca fueron tratadas por la policía nacional, como método de prevención de la patología que hoy en día se le imputa.
- 9.2. El ataque a la integridad física narrado en el hecho antes citados, es precisamente un factor de riesgo psicosocial, dada la profesión de policía del señor Mosquera torres y en consecuencia es la relación causal que afecto protuberantemente su salud física y mental, ya que tanto dolor que le produjo el trauma recibido en la columna vertebral genero la patología psiquiátrica que se le imputa a la policía nacional como de origen laboral
11. Como examinamos y en apoyo a mis pretensiones puede usted apreciar señor juez, en el caso en concreto existe una falsa motivación del acta medico laboral No. 55 de 22/01/2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca, toda vez que las autoridades medico laborales están haciendo ver que la patología psiquiátrica que presenta el señor MOSQUERA TORRES es de origen común, basándose en el concepto emitido por el psicólogo de la policía nacional –especialista en salud ocupacional quien acreditó el diagnostico: **Trastorno Mixto De Ansiedad Y Depresión**, obrante a foliatura 86 del C.O.
12. Es falso de toda falsedad el diagnostico emitido por el psicólogo especialista en salud ocupacional de la entidad demandada, diagnostico que fue sustento para las actas medico laborales acusadas, toda vez que los cuadros mórbidos que presenta el señor MOSQUERA TORRES, son totalmente diferentes a los enunciados por dicho especialista de salud ocupacional; para ello es conducente, pertinente y útil que se decrete una nueva valoración medico laboral por parte de la junta regional de invalidez a efectos de determinar, la estructuración y origen de verdadero diagnostico medico psiquiátrico que presenta el señor MOSQUERA TORRES; esta objeción la presento con el fin de demostrar la falsa motivación en la que recayeron los actos administrativos acusados a

efectos de declarar su nulidad, ya que esta falsa motivación es la causa de procedibilidad por la cual debe declararse su nulidad.

13. En efecto, el acta medico laboral No. 7041 del 19 de agosto del 2014, es igualmente ilegal porque esta falsamente motivada en el diagnostico psiquiátrico y en el origen de la patología, la cual es de origen laboral y no común como erradamente lo hace parecer las autoridades medico laborales, dicho yerro se evidencia en la imputación de la patología psiquiátrica que le hace el tribunal médico al caso del señor MOSQUERA TORRES, desconocieron la relación de causalidad entre el factor de riesgo psicosocial en el cual estuvo expuesto de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo y lugar, el día el día 31 de enero del 2010 en la subestación de policía piedrancha perteneciente al departamento de policía de Nariño, donde resulto gravemente herido con arma de fuego produciéndole una protuberante perdida de la capacidad laboral

Respecto a este tópico por el cual se acusan las actas medico laborarles (falsa motivación) la jurisprudencia del consejo de estado ha manifestando en su ratio decidendi que en relación con el tema de los actos definitivos²³ :

“Los actos expedidos por la Junta Médica Laboral y recurridos ante el Tribunal Médico Laboral, en cuanto determinan una incapacidad inferior a la requerida para tener derecho a la pensión de invalidez, son actos definitivos en la medida en que impiden seguir adelante con la actuación.

En las anteriores condiciones, no es posible exigir al interesado que a pesar de no alcanzar el porcentaje mínimo de incapacidad para tener derecho a la pensión de invalidez, acuda ante la entidad en procura de tal derecho, siendo en cambio procedente, ante la irrevocabilidad de tales actos, acudir en su demanda para que se estudie si estuvo bien fijado el índice lesional, y si además la pérdida de la capacidad es imputable al servicio lo que conllevaría, en caso de ser favorable al actor, al reconocimiento de la prestación.

En conclusión, si el acto del Tribunal Médico Laboral impide continuar con la actuación en la medida en que no permite al afectado solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez, no se le puede dar el calificativo de simple acto de trámite y en tal caso, es susceptible de demanda ante ésta jurisdicción”.

14. En conclusión al hecho anterior, las autoridades medico laborales no estudiaron de fondo si estuvo bien fijado el índice lesional asignado a la patología psiquiátrica que padece el señor MOSQUERA TORRES y, si además la pérdida de la capacidad concerniente a esta patología psiquiátrica es imputable al servicio como enfermedad laboral, luego entonces tal yerro se evidencia en el acta medico laboral No. 7041 del folio 298 del libro de tribunales medico laborales en donde se decidió la apelación presentada contra el acta medico laboral No. 55 del 22/01/2014 proferida por la seccional de sanidad valle, luego el tribunal médico laboral sin hacer un verdadero examen de legalidad ratifico el índice de lesión asignado a esta patología y su no imputación al servicio como enfermedad laboral:

²³ Consejo de Estado, Sección Segunda, , Exp. No. 1836-05, M. P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.

- A. Antecedentes –lesiones –afecciones –secuelas
- 1.....
 2. trastorno depresivo moderado
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
- B. clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad para el servicio
- C. evaluación de la disminución de la capacidad laboral
- D. imputabilidad al servicio
- 1.....
 2. literal A en servicio, pero no por causa y razón del mismo. Se trata de enfermedad común
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
- E. fijación de los índices correspondientes:
- 1
 - 2. se ratifica numeral 3-027 Sin literal índice 4**

15. Conforme a los hechos anteriores, el tratamiento que las autoridades medico laborales le otorgaron a la patología psiquiátrica que padece el señor MOSQUERA TORRES, no se adecua al literal A del artículo 37 del decreto 1796 del 2000

ARTICULO 37. DERECHO A INDEMNIZACION. El derecho al pago de indemnización para el personal de que trata el presente decreto, que hubiere sufrido una disminución de la capacidad laboral se valorará y definirá de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y se liquidará teniendo en cuenta las circunstancias que a continuación se señalan:

- a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común.
- b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo.
- c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.

Y no se adecua porque en el caso en concreto, el trámite de liquidación de la indemnización que se le efectuó al señor MOSQUERA TORRES en la

resolución No. 33504 del 01 de diciembre del 2014²⁴, no se ajusto a la legalidad porque sencillamente estuvo motivado falsamente por el acta medico laboral No. 7041 del 19 de agosto del 2014 proferida por el tribunal médico laboral, falsedad que radica en que la misma argumentación que se hizo en contra del acta medico laboral No. 55 del 27 de enero del 2014

16. Como se probó es cierto que la resolución No. 33504 del 01 de diciembre del 2014 proferida por la jefe de grupo de indemnización del área de prestaciones sociales de la policía nacional es nula porque esta falsamente motivado por las autoridades medico laborales, quienes desconocieron el índice legal y la imputación de la patología psiquiátrica que padece el señor MOSQUERA TORRES, la cual estuvo indebidamente valorada. Razón por la cual debe ser reliquidada y además de ello dado el derecho de opción de mi prohijado, debe igualmente reconocérsele la pensión de invalidez como el derecho más favorable la protección del hombre y su núcleo familiar desde un aspecto patrimonial.
17. La anterior concepción es procedente toda vez que dada la alta discapacidad medico laboral que presenta el señor Mosquera torres, y que es superior al 75% se da cumpliendo al presupuesto objetivo de que trata el artículo 89 del Decreto 94 de 1989, reformó *“el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Ejército Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional”*, y dispuso en su artículo 89 lo siguiente:

“(…) PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES AGENTES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así:

a) El 50% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución del 75% de la capacidad sicofísica.

b) El 75% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance el 95%.

²⁴ Ver folio No. 43 adjunto

c) El 100% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.

18. La asignación de retiro del señor MOSQUERA TORRES, actualmente es de \$ 2,009.782²⁵, lo cual es menos desfavorable ya que, es cierto que el sueldo básico de un intendente jefe de la policía nacional es de \$ 1.959.461, derecho que de conformidad con el artículo 49 del decreto 1091 de 1995 indica que la base de liquidación que se debe realizar a un retirado del servicio activo es la siguiente:

ARTICULO 49. Bases de liquidación. A partir de la vigencia del presente decreto, al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que sea retirado del servicio activo, se liquidará las prestaciones sociales y periódicas sobre las siguientes partidas.

- a. Sueldo básico
- b. Prima de retorno a la experiencia
- c. Subsidio de alimentación
- d. Una duodécima parte (1/12) de la prima de navidad.
- e. Una duodécima parte (1/12) de la prima servicio.
- f. Una duodécima parte (1/12) de la prima de vacaciones.

PARÁGRAFO. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios y compensaciones consagradas en los decretos 1212 y 1213 de 1990 y en el presente decreto, serán computables para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.

Luego entonces, es ilegal y atenta contra el principio pro homine y favorabilidad que la policía nacional, le esta cancelando al señor Mosquera torres, la suma de \$ 2.009.782, cuando legalmente se le debe estar cancelando la asignación básica que recibe un intendente jefe de la policía nacional, mas los demás asignaciones por retiro de cara al artículo 49 de la citada codificación, derecho prestacional que por ley debe reconocérsele pues fue este grado con el cual salió retirado y asciende a la siguiente cuantía:

1.	Sueldo básico	1.959.461
2.	Prima de retorno a la experiencia	137.162
3.	Subsidio de alimentación	43.594
4.	Una duodécima parte (1/12) de la prima de navidad	226.181
5.	Una duodécima parte (1/12) de la prima servicio.	89.175
6.	Una duodécima parte (1/12) de la prima de vacaciones	92.891

Total de valor a pagar por concepto de pensión de invalidez de **\$ 2'548.464**

SOBRE ESTE MONTO DEBE INDEXARSE AL MOMENTO DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA QUE PONGA FIN A ESTE PROCESO.

²⁵ Ver folio No. 46 adjunto

19. Respecto a este hecho esbozado anteriormente, es inconstitucional e ilegal que la policía nacional desconozca que por principio de favorabilidad es más benigno otorgarle al pensión de invalidez a mi prohijado, porque resulta que el señor MOSQUERA TORRES es la única persona que le aporta y suministra las condiciones necesarias a su hogar, y la exigua suma de \$ 2.009.782 que le cancela la policía nacional, sin descuentos, ya que no le alcanza económicamente para mantener a su esposa DIANA MARIA MILLAN JARAMILLO y a sus dos hijos matrimoniales MANUELA MOSQUERA MILLAN, de 13 años de edad, JUAN JOSE MOSQUERA MILLAN, de 13 años, y a su hijo extramatrimonial JUAN DAVID AGUDELO ACOSTA, a quien el juzgado cuarto de familia de armenia (Q) en auto No. 0383 del 29 de junio del 2012, le otorgo la obligación alimentaria de entregarle mensualmente la suma de 25% lo que equivale a \$ 318.088; resultando entonces que la asignación de retiro que mensualmente se la cancela a mi prohijado con cumple con las medidas de protección de este núcleo familiar y en efecto es más beneficiosa la pensión por invalidez ya que su monto como se demostró podría general una mejor estilo de vida al que comúnmente lleva el señor Mosquera con su núcleo familiar. Esta medida de protección como lo es el derecho a la pensión por invalidez, es la decisión del señor MOSQUERA TORRES, la cual guarda intima relación con el principio de interés superior de los menores de edad MANUELA MOSQUERA MILLAN, JUAN JOSE MOSQUERA MILLAN y JUAN DAVID AGUDELO ACOSTA, razón de peso por la cual debe garantizarse en este estado social de derechos esta medida de protección.
20. La presente acción la interpongo dentro del término de ley, toda vez que por tratarse de asuntos atinentes a la indemnización, el literal B del artículo 47 del decreto 1796 de 2000, dispone que el termino de prescripción establecido en el presente decreto es de un (1) año.
21. Como se probó los actos administrativos acusados, son ilegales porque fueron falsamente motivados y en consecuencia deber ser apartados del ordenamiento jurídico, pues con ellos se lesión intereses superiores y se contrarían las disposiciones 094 de 1989 y 1796 del 2000 y 1091 de 1995
22. Se me confirió poder para el ejercicio de la presente acción

IV. FUNDAMENTO DE DERECHO DE MIS PRETENSIONES

Mis pretensiones encuentran su fundamento de derecho en:

1. el artículo 1, 2, 4, 13, 23 y 48 de la constitución política de Colombia. Decreto 094 de 1989, 1796 del 2000
2. La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1971; la Declaración de los Derechos de los Impedidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975 por Resolución 3447, según la cual en la medida de sus posibilidades los discapacitados tienen derecho a obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil y productiva y remunerativa (art. 7), y Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 48° periodo de sesiones, mediante resolución n.° 48/96 del 20 de diciembre de 1993.

3. Organismo intergubernamental que tiene dentro de sus funciones elaborar un sistema normativo internacional a través del cual se reconozcan los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las condiciones de trabajo.
4. De acuerdo con la recomendación n.º 168, “la expresión persona inválida se refiere a toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo estén sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida”. Allí se contempla la necesidad de que se implementen medidas para garantizar un acceso equitativo de las personas con discapacidad a la capacitación y al empleo en igualdad de oportunidades; empleo que, siempre que sea posible, debe corresponder a la elección de aquellas y a sus aptitudes individuales.
5. Es del caso traer a colación que en el Salvador la Asamblea Legislativa profirió el Decreto Legislativo 791 de 1991 mediante el cual expide la *“ley de protección y rehabilitación profesional del personal lisiado de la Fuerza Armada”*. Dicho ordenamiento tiene como objeto dictar normas básicas que permitan una mayor participación del Estado en la atención y protección a esas personas lisiadas y coadyuvar en el desarrollo de programas de rehabilitación que en su favor lleva a cabo el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. En su artículo 3 dispone que *“[l]as dependencias del Estado que pagaren los salarios de su personal con cargo al Presupuesto General de la Nación, así como las Instituciones Oficiales Autónomas, deberán dar colocación en puestos de trabajo y de acuerdo a las aptitudes que tuvieran, al personal que hubiere concluido su proceso de rehabilitación profesional, a fin de contribuir a su reincorporación a la vida activa del país. En la ocupación de aquellos cargos donde no se requiere para su cumplimiento un mayor esfuerzo físico, se dará prioridad al personal lisiado. Por lo menos, un dos por ciento del total de empleados, de cada dependencia, deberá integrarse con dicho personal”*. También se otorgan beneficios fiscales a las microempresas adquiridas por los lisiados.
6. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-531 del 10 de mayo de 2000 (M.P. Alvaro Tafur Galvis). En dicha oportunidad la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que impide que la disminución física, sensorial o síquica se configure por sí misma en causal de despido o terminación del contrato de trabajo, a menos que esa limitación sea demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.

V. Las normas violadas

Los actos administrativos acusados al proferirse violentaron las siguientes normas

- Constitución Política, los artículos 1, 2, 3, 13, 25, 48 y 53; y, ley 1437 del 2011 (CPACA) y 094 de 1989 y 1796 del 2000 por ser las codificación en las que se reglamentaron las autoridades medico laborales.

VI. PRINCIPIOS VIOLENTADOS:

LEGALIDAD, VERACIDAD, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DEL DISCAPACITADO FAVORABILIDAD, PRO HOMINE, Y DIGNIDAD HUMANA.

VII. CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Basta con invocar la sentencia del honorable CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN B. Consejera ponente: BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ (E), sentencia del treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), Radicación número: 50001-23-31-000-2005-10203-01(1860-13). Actor: HUGO OSORIO GONZÁLEZ. Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, para demostrar la ilegalidad de las actas medico laborales acusadas y la resolución por la cual se le liquidan una indemnización al señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, con ocasión al acta medico laboral No. 7041 proferida por el tribunal médico laboral, pues en dicho acto que se traduce en la resolución y/o expediente 33504 del 01/12/2014 proferida por el área de prestaciones sociales de la policía nacional no solo se le debió reconocer la indemnización a mi prohijado, sino que además debió reconocérsele el derecho a la pensión por invalidez, lo cual omitió la entidad demanda, como el derecho de opción de cual gozan los asociados, resultando entonces que con tal pretermisión se violento el principio de legalidad y veracidad de los actos administrativos acusados, pues quedo plenamente acreditado que los actos acusados están falsamente motivados en diagnósticos médicos de psiquiatría cuyo índice lesional que aplicaron las autoridades medico laborales no corresponden a la legalidad y a la realidad, ya que redundo en el caso en concreto que se examina, existe una relación de causalidad entre el factor de riesgo que es precisamente la toma guerrillera que padeció el señor Mosquera en la fecha 31 de enero del 2010 mientras que prestaba sus servicio en la subestación de policía piedrancha perteneciente al departamento de policía de Nariño, factor que encuentra pleno sustento en la patología psiquiátrica que hoy padece y que es degenerativa, ya que ha irradiado de forma integral en su salud mental, impidiéndole la realización de sus necesidades básicas fundamentales.

Es apenas natural, que tratándose de una lesión padecida en la columna vertebral que afecta la capacidad laboral y disminuye la calidad de vida del señor Mosquera, no puede esperarse que ésta se mantenga intacta con el paso del tiempo y que el fuerte dolor que presenta no genere secuelas mentales; pues cualquier persona que padece una atentado como el que padeció mi prohijado le genera a cualquier ciudadano una serie de miedos y limitaciones que se ven reflejados en el tiempo, es más, el deterioro mental es una consecuencia de la lesión sufrida por el señor MOSQUERA TORRES durante el tiempo que prestó sus servicios en la policía nacional con ocasión del atentado del día 31 de enero del 2010 y no una simple incapacidad generada por el paso del tiempo, como erradamente lo hace ver la entidad demandada.

Que jurídica es procedente la opción del señor Mosquera torres, respecto a optar por la pensión de invalidez y no la asignación de retiro, toda vez que el **decreto 1212 de 1990 que en su Artículo 156**, dispone la FORMA DE PAGO DE ASIGNACIONES DE RETIRO Y PENSIONES. Las asignaciones de retiro y pensiones policiales se pagarán por mensualidades vencidas durante la vida del agraciado y son compatibles con los sueldos provenientes del desempeño de empleos públicos, incluidos los correspondientes a la actividad policial por movilización o llamamiento colectivo al servicio.

Las asignaciones de retiro y las pensiones policiales son incompatibles entre sí y no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público; igualmente son incompatibles con las pensiones de invalidez o de retiro por vejez, **pero el interesado puede optar por las más favorables.**

Las asignaciones de retiro y las pensiones policiales son compatibles con las pensiones de jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público.

Que el artículo **36. Del decreto 4433 del 2004, dispone que la Compatibilidad de la asignación de retiro y pensiones.** Las asignaciones de retiro y pensiones previstas en el presente decreto, son compatibles con los sueldos provenientes del desempeño de empleos públicos, incluidos los correspondientes a la actividad militar o policial, por movilización o llamamiento colectivo al servicio y con las pensiones de jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público.

Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto, son incompatibles entre sí y no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público, **pero el interesado puede optar por la más favorable.**

Las asignaciones de retiro y las pensiones policiales son compatibles con las pensiones de jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público.

VIII. PRUEBAS:

Solicito se decreten, practiquen e incorporen al presente proceso administrativo como pruebas y se tengan como tales al momento de fallar, las siguientes, estas pruebas son pertinentes, conducentes y útiles pues tiene como objeto desvirtuar la presunción de legalidad y de veracidad de los actos administrativos acusadas

a. DOCUMENTALES APORTADOS:

- actas medico laborales Nos. 787 Del 17 de noviembre de 2011 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca y, el acta medico laboral No. 4560 MDNSG-TML -41.1 registrada a folio No. 091

del 26 de junio del 2013 proferida por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía

- actas medico laborales Nos. 55 Del 22 de enero de 2014 proferida por la seccional de sanidad valle del cauca y, el acta medico laboral No. 7041 MDNSG-TML -41.1 registrada a folio No. 298 del 19 de agosto del 2014 proferida por el tribunal médico laboral de revisión militar y de policía
- resolución No. 33504 del 01/12/2014 proferida por el área de prestaciones sociales, mediante la cual se le liquida la indemnización por incapacidad al señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES
- **Historia clínica personal del señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES**
- Copia de la cedula de ciudadanía del señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES
- Constancia de sueldo del señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES
- Registros civiles de matrimonio del señor JUAN CARLOS MOSQUERA, donde consta su obligación con la señora DIANA MARIA MILLAN JARAMILLO
- Registro civil de nacimiento de sus dos hijos matrimoniales MANUELA MOSQUERA MILLAN, de 13 años de edad, JUAN JOSE MOSQUERA MILLAN, de 13 años
- Copia de la providencia proferida por el juzgado cuarto de familia de armenia (Q) en auto No. 0383 del 29 de junio del 2012 mediante el cual se demuestra la obligación alimentaria con el menor JUAN DAVID AGUDELO ACOSTA
- Resolución de retiro No. 01170 del 03 de abril del 2013 proferida por el director general de la policía nacional.
- Informe administrativo por lesiones No. 034 del 2010, en la cual se califican las lesiones sufridas por el señor Mosquera torres, el día 31/01/2010.
- Constancia de valoración psicológica realizada al señor MOSQUERA TORRES por el especialista en salud ocupación de la policía nacional.

b. TESTIMONIALES

Solicito recepciones los siguientes testimoniales:

1. DIANA MARIA MILLAN JARAMILLO

Esta testigo se podrán notificar en la carrera 32 No. 24-56, barrio céspedes del municipio de tulua (V), tel. 3218153531. El entorno de estas pruebas es demostrar hechos que interesan al proceso y ante todos Acreditaran los graves perjuicios que se le produjo al demandante con ocasión con los actos administrativos acusados,

c. PERICIALES-MEDICO LABORALES:

Solicito al honorable juez que designe a la junta medico regional de invalidez del valle del cauca, ubicada en la calle 5 E No. 42 A-05, B/ Tequendama en la ciudad de Cali, o a la junta quien usted estime conveniente para que tomando en cuenta la historia clínica del señor **JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES** y los antecedentes clínicos, diagnostique y emita los siguientes conceptos: **a)** cual es el porcentaje actual de la perdida de la capacidad medico laboral que presenta de conformidad con la patología psicológica y/o psiquiátrica; **b)** cual es el origen de esta patología psiquiátrica tomando en cuenta su historia clínica

particular y la existen en la seccional de sanidad valle del cauca y, **C)** cual es la fecha de estructuración de la patologías psicológica y/o psiquiátrica, según la historia clínica personal del señor, **D)** que deficiencias le produjeron al señor **JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES**, la patología psiquiátrica y cuál es su diagnostico medico psiquiátrico; **E)** determine si el ataque guerrillero que padeció el señor Juan Carlos Mosquera torres el día 31 de enero del 2010 en la subestación de policía piedrancha perteneciente al departamento de policía de Nariño conforme lo acredita su historia clínica y el reporte de lesiones No. 34 del 2010 adjunto como prueba documental, **mientras prestaba el servicio de policía**, es una factor de riesgo y de ser positivo emita concepto si la patología psiquiátrica demuestra una relación de causalidad con dicho factor de riesgo; **F)** que tipo de factor de riesgo se clasifica el ataque que recibió el señor MOSQUERA TORRES, el día 31 de enero del 2010.

d. PERICIAL:

Le Solicito al honorable juez designe a **un psiquiatra** para que teniendo en cuenta la historia clínica del señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES diagnostique sobre lo siguientes: **a)** emita diagnostico psiquiátrico clínico que presenta .B) conforme al anterior, solicito absuelva el siguientes cuestionario (i) si dichas lesiones limitan el funcionamiento global y normal del señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, (ii) si dichas lesiones limitan o inciden en el grado de orientación, independencia física, desplazamiento, ocupación, integración social y autosuficiencia del señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES,(iii) si dichas lesiones limitan la locomoción, comunicación, cuidado personal, disposiciones del cuerpo y destreza del señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES.

e. INTERROGATORIO DE PARTE:

El día y la hora que el honorable juez estime conveniente formulare interrogatorio de parte de forma verbal o en sobre cerrado al señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, donde se darán a conocer hechos que interesan al proceso.

IX. ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA:

La estimación razonada de la cuantía está debidamente relacionada y asciende a \$ dieciocho millones cuatrocientos cuarenta y tres mil, quinientos cincuenta y cuatros pesos \$ (18.443.554)

1. Perjuicios patrimoniales consolidados:

Lucro cesante consolidado: con la producción del acto administrativo No. 33504 del 01 de enero del 2014 proferido por el área de prestaciones sociales de la policía nacional, mediante el cual se le cancela al señor JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES, unas indemnización equivalente la perdida de la capacidad laboral, que determino el acta medico labora No. 7041 del 19/08/2014, desconociéndole en índice lesional legal de la patología psiquiátrica y su imputación al servicio como de origen laboral, además el derecho que le asiste como pensionado bajo la modalidad de

invalidez, se puede acreditar que ha dejado de devengar las siguientes sumas de dinero

1. Por factor de disminución de la capacidad laboral respecto a la patología psiquiátrica presentada por el demandante, legalmente debe asignársele el tope máximo de indemnización por estrés postraumática cuya asignación de índice lesional es de 14, de conformidad con el numeral 3-040 del artículo 79 del decreto 094 del 1989, pagaderos con un edad de 45 años, y una disminución lesional de 46.5%, atendiendo el sueldo básico que devenga un intendente jefe, mas las asignaciones de retiro que trata el artículo 49 de decreto 1095 de 1994, para una valor de total devengado de :

1. Sueldo básico	1.959.461
2. Prima de retorno a la experiencia	137.162
3. Subsidio de alimentación	43.594
4. Una duodécima parte (1/12) de la prima de navidad	226.181
5. Una duodécima parte (1/12) de la prima servicio.	89.175
6. Una duodécima parte (1/12) de la prima de vacaciones	92.891

Total de valor a pagar por concepto de pensión de invalidez de **\$ 2'548.464**

Dicho valor de indemnización se debe multiplicar por el factor de disminución que aritméticamente le correspondería

$DL_2 = (100-DL_1) DL_2$
 $46.5\% = (100-62.14\%) 46.5\%$
 $DL_2 = 37.86 \% + 46.5\%$
 $DL_2 = 84.36\%$ cuya conversión a la tabla de índices de lesión sería de 19, como factor de disminución, a lo que se le resta el factor de asignación de 15 índices correspondiente a DL_1 , (ya que se pago y liquidado con ocasión del acta médico laboral No. 4560 del 26/06/2013), para un total de 4.90 índices que no fueron liquidados, ni pagado al demandante en la resolución No. 33504 del 01/12/2014 proferida por el área de prestaciones sociales de la policía nacional.

Luego entonces el valor de la indemnización es de **\$ 2'548.464 x 4** índices, para un total a pagar de **\$ 12.487.473**, valor que no fue reconocidos adicionalmente, ni relacionados en la resolución No. 33504 del 01/12/2014.

Para actualizar el valor por concepto legal del índice lesional de psiquiatría y su imputación al servicio de \$ 12.487.473, es necesario hacerlo conforme a la siguiente regla

$S = Ra [(1+i)^n - 1 / i]$ que van desde el proferimiento de la resolución no. 33504 el día 01/12/2014 hasta la fecha de presentación de la demanda

$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$S = \frac{12.487.473 (1+0.004867)^7 - 1}{0.004867}$$

$$S = \$ 14'672.780$$

2. Como pensionado por invalidez, mensualmente el señor JUAN CARLOS MOSQUERA ha dejado de percibir desde el proferimiento de la resolución No. 33504 del 01/12/2014 la suma de **quinientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos** (\$ 538.682) suma que es el resultado del total devengado por un intendente jefe de la policía nacional, el cual asciende a **2'548.464-el valor de la asignación de retiro que devenga el demandante de 2.009.782.**

El factor de indemnización que se dejó de pagar al señor Mosquera torres **$S = Ra [(1+i)^n - 1 / i]$ que van desde el proferimiento de la resolución no. 33504 el día 01/12/2014 hasta la fecha de presentación de la demanda, es decir han pasado 7 meses**

$$S = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i}$$

$$S = \frac{12.487.473 (1+0.004867)^7 - 1}{0.004867}$$

$$S = \$ 14'672.780$$

Como pensionado por invalidez, mensualmente el señor JUAN CARLOS MOSQUERA ha dejado de percibir desde el proferimiento de la resolución No. 33504 del 01/12/2014 la suma de **quinientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos** (\$ 538.682)

$S = Ra [(1+i)^n - 1 / i]$ que van desde el proferimiento de la resolución no. 33504 el día 01/12/2014 hasta la fecha de presentación de la demanda, es decir han pasado 7 meses

$$S = \frac{Ra (1+i)^n - 1}{i}$$

$$S = \frac{538.682 (1+0.004867)^7 - 1}{0.004867}$$

$$S = \$ 3.770.774$$

SUMATORIA DE PERJUICIOS

Perjuicios patrimoniales por factor disminución PCL	14.672.780
<u>Emolumentos pensión de invalidez</u>	<u>3.770.774</u>
TOTAL DE PERJUICIOS	\$ 18.443.554

X. COMPETENCIA POR FACTOR CUANTÍA :

Con fundamento en el numeral 3 del artículo 155 ley 1437 del 2011, es competente en primera instancia el honorable juez administrativo de Buga, en razón de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controvierte actos administrativo de cualquier autoridad, toda vez que los perjuicios que se reclaman NO son superior a los **QUINIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES** (500 SMLMV) y que a la presentación de la demanda se estima ascienden a \$ 18.443.554

XI. COMPETENCIA POR FACTOR TERRITORIAL:

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 156 ley 1437 del 2011, es competente el honorable juez administrativo de Buga, toda vez que el lugar de domicilio del demandante es en la calle 13 B No. 38 C-108, B/ cóndor 2 de la ciudad de tulua valle.

XII. DECLARACIÓN JURADA:

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he presentado demandas ante la corporación administrativa con base a estas pretensiones y mismos hechos;

XIII. PROCESO A SEGUIR

El proceso a seguir es el declarativo, previsto en el artículo del 138 de la ley 1437 del 2011 (CPACA), nulidad y restablecimiento del derecho.

XIV. ANEXOS:

Adjuntos a esta demanda los siguientes documentos:

- 1. sendas copias de la demanda y sus anexos para el traslado a la demandada y al agente del ministerio público y el litis consorte necesario.
- 2. copia para el archivo del juzgado
- 3. poder especiales para actuar
- 4. pruebas anticipadas (extrajudiciales y documentales) las que se encuentran en mi poder.
- 5. Copia Demanda y sus anexos en folio magnético **CD**.

XV. NOTIFICACIONES :

- **DEMANDADA:** ministerio de defensa- policía nacional en Santiago de Cali, calle 21 No. 1N-65, barrió Piloto, Teléfono (032) 8981260/61
- **DEMANDANTE:** recibe notificación en la secretaria del despacho o en la carrera calle 13 B No. 38 C -108, B/ cóndor 2 en tulua valle tel. 3006244030 o 3113002398.
- **APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE:** recibo notificación en la secretaria del despacho o en la carrera 10 No. 16-43 en zarzal valle del cauca e tel. 3006244030 y autorizo recibir todo tipo de notificaciones en el siguiente correo electrónico: hectorortizmejia16@gmail.com

Respetuosamente,

El original firmado por el suscrito

JHON WILSON PLATA MÉNDEZ

CC No. 94.460.461 de Cali

T.P No. 160099 del C.S de la judicatura.

Dirección: calle 13 B No.38 C -108, B/ cóndor 2 tulua valle, tel. 3006244030.

Correo: hectorortizmejia16@gmail.com